Revista Electrónica de Psicología Iztacala

**I Z T A C A L A**

Universidad Nacional Autónoma de México

**Vol. 17 No. 1 Enero de 2014**

LEGITIMACIÓN DE LA INJUSTICIA: VIOLENCIA, UTOPÍA Y DESAMPARO

Irma Fernández Sánchez[[1]](#footnote-1)

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Iztacala

*“Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos.*

*Camino diez pasos, y el horizonte se desplaza diez pasos más allá.*

*A pesar de que camine, no la alcanzaré nunca.*

*¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso: para caminar.”*

*Eduardo Galeano*

RESUMEN

En este ensayo se reflexiona en torno a la injusticia como una forma de violencia no reconocida en la legislación oficial, se suma al clima de inseguridad, delincuencia y miedo que se vive en el México de nuestros días. Esta violencia emana de la indiferencia y el abuso premeditado en el ejercicio del poder, genera un estado social carente de esperanza y autodeterminación. Mi punto de partida radica en algunas características gubernamentales del sexenio 2006-2012 que perpetuán y agregan formas de dominación y control de un orden público sustentado en la inequidad, la marginación y la ausencia fáctica del Estado de Derecho. Se cuestiona el papel que juegan figuras encargadas de resguardar la seguridad social en términos de delincuencia, justicia y legalidad y se señala el uso unidireccional del poder como pieza clave en la determinación de los criterios que legitiman y definen dichas formas de violencia. Frente a la injusticia, que no se reconoce explícitamente como acto de violencia, se propone la alternativa de implementar un cambio de actitud personal, que sumado en colectividad, pondere el ejercicio horizontal, responsable, comprometido e inviolable de las acciones civiles frente a las imposiciones que anulan la voluntad popular.

***Palabras clave***: injusticia, violencia, poder, dominar, ejercicio horizontal.

INJUSTICE LEGITIMATION: VIOLENCE, UTOPIA, ABANDONMENT

ABSTRACT

This essay is a reflection about the injustice as a form of violence not recognized by official legislation, and which is added to the environment of insecurity, delinquency and fear we live in the Mexico of our days. This violence arises from the indifference or premeditated abuse on the exercise of power, generating a social condition with a lack of hope and self-determination. The starting point of this analysis is based on some governmental characteristics of the period 2006-2012, which have added and perpetuated forms of domination and control of a public order sustained in inequity, marginalization and the factual absence of the rule of law. Questioning the role that play the ones entrusted to protect the social security in terms of delinquency, justice and legality, the unidirectional use of the power, distinguishes itself as a key factor in the determination of the criteria that legitimize and define the mentioned forms of violence. Against the injustice, which is not explicitly recognized as an act of violence, an alternative is proposed: implement a personal attitude change added to a collectivity, which assign weight to the horizontal, responsible, promising and inviolable exercise of civil actions, against the impositions that annul the popular will.

***Key words***: injustice, violence, power, dominate, horizontal exercise.

La estructura de gobierno que ha controlado los hilos del poder en nuestro país desde sus orígenes corruptos, represores y autodestructivos se ha caracterizado por avanzar a paso firme sobre los peldaños de la corrupción, el abuso, la ambición desmedida y la violencia social, sus efectos han quedado marcados en miles de años de engañoso desarrollo y evidente miseria e injusticia, distribuidos con inequidad entre la sociedad, pues la clase política siempre se ha privilegiado ponderando sus intereses sobre los de la población.

La prometida ruptura con los vicios de 70 años de gobierno y la llegada del autoproclamado gobierno del cambio terminó por mostrar su verdadera sombra como encarnación máxima de este sistema violento y desesperanzador, pues no sólo nunca mostró un cambio real, sino que exacerbó las deplorables condiciones en las que de por sí ya se encontraba el país, aleccionándonos al recordar que si las cosas se habían visto difíciles para todos, siempre pueden estar peor.

Cuando realizamos el balance de daños y perjuicios heredados del agonizante sexenio de Felipe Calderón, y digo agonizante con todo lo que eso significa: desgastado, agotado, moribundo; nos queda el amargo en la boca después de confirmar el fracaso de un gobierno que se despide de manera insensata y sobreactuada, haciendo una apología de sus estrategias para terminar con el crimen organizado y la violencia, situación que más que agotarse, se sublimó mostrando los costos que implica destapar las cloacas del poder, y no sólo de una estructura delincuencial antisocial, como la retórica oficial no se cansa de afirmar, sino haciendo evidente a todas luces la verdadera organización de crimen que se alimenta y reproduce en las entrañas del gobierno en turno y evidentemente, del turno siguiente también.

Hundidos, literal y oficialmente hasta “el copete” en medio de un oscuro agujero de frustración, desengaño e impotencia de quienes llegaron a incubar en sus mentes la esperanza de una vida mejor depositada en la democracia, con mejores oportunidades de empleo y “manos limpias” dirigiendo el curso de nuestro país, de aquellos que apostaron al más puro estilo de Walt Disney en la fantasía de la justicia social en manos de las fuerzas castrenses y de las políticas de seguridad nacional debatidas desde y para la subsistencia del mismo sistema reaccionario, represivo y clientelar, no cesan de recibir la depresiva cuenta del desamparo, del sistema de excepcionalidad que cobija a los actores del poder para asegurar su subsistencia en las plataformas políticas, y en cambio dejando en la vacuidad total a las figuras en quienes se supone que recae la responsabilidad de preservar la seguridad y el ejercicio de la justicia social, así era entendido por todos, y en algún momento se confiaba en el gendarme, en la ley, en la justicia, pero ante las evidencias solo ha quedado el desamparo.

 La proliferación indiscriminada y apabullante de la violencia en todas sus manifestaciones, formas, protagonistas y depositarios, orilla a la sociedad actual al replanteamiento de los imaginarios utópicos y esperanzadores en torno a las posibles soluciones que se vislumbran para rescatar de la agonía a los mexicanos, y virar el curso de las soluciones aplicadas a los conflictos que han quebrantado lastimeramente la confianza, la credibilidad y la subsistencia individual.

En este sentido, es prudente hacer una pausa para cuestionar la prudencia, eficacia y aplicabilidad de los recursos que han sido ejecutados para disputar el terreno de la legalidad, puesto que lo correcto, lo bueno, lo lógico, lo ideal, lo moralmente adecuado, y lo conveniente son conceptos que distan ampliamente del dominio afamado del sentido común y, sin embargo, deambulan en las lenguas que determinan y dictaminan la espacialidad y temporalidad de su aplicación a conveniencia unidireccional, y también como fantasma desconocido en la objetividad, pero temido en el imaginario de los sujetos supeditados a su voluntad. En este terreno, se juega una suerte que involucra amistades y enemistades que se basan en millonarios obsequios, puestos gubernamentales, sueldos, protecciones, exoneraciones misteriosas o su contraparte, evidencias públicas, saboteos, desprestigios promovidos por las versiones “serias” de televisión, desapariciones, torturas, muerte. Quiénes son los buenos y quiénes son los malos, todo depende de los objetivos del que se encuentra en la cúspide del poder.

Así, comenzaremos tomando como premisa que la base de una estructura política se encuentra cimentada en el mantenimiento de un poder que preserva un orden ideológico, económico, judicial y social (Aróstegui, 1994); dicho poder se alimenta de todo un conjunto de estrategias y una elevada gama de medios, justificaciones y organizaciones por los cuales se asegura la permanencia del mismo, recurriendo sin reservas a la fuerza física, tal como se ha visto en cuantiosos y deleznables sucesos a lo largo de la historia.

Hobbes señalaba que una fuente ilimitada que emana del hombre es el deseo de poder y dominación, el hombre por el hombre mismo, el conflicto comienza cuando cada hombre y mujer tiene deseos propios que tropiezan con el de los otros, cada uno anhela el poder, su poder por sobre los demás.

En esta relación de dominio se establece una estrecho vínculo entre poder y violencia, en donde gran parte de los conflictos proceden de actores antagonistas cuyos medios de lucha son desiguales, un ejemplo de ello sucede con los conflictos entre gobierno y gobernados. Distingamos entonces las trincheras y batallas que se luchan en ambos bandos, asumiendo que determinar quiénes son los desfavorecidos y quiénes los beneficiarios, llega a ser un objeto de subasta que responde a los intereses de quienes lo definen. Volvemos entonces al terreno en juego, al poder que está detrás del ejercicio de la legalidad, del orden social anhelado, a la paz no definida, no conocida, nunca presente, pero siempre esperada.

Así tenemos que el uso de la fuerza desde la plataforma oficial del poder tiene como misión el sostenimiento de un sistema estable de expectativas que es preservado por cuerpos policiacos, militares, burocráticos, legislativos, religiosos, académicos y medios de comunicación, mediante ingeniosas y perversas tácticas psicológicas de persuasión, hasta el tradicional estilo de la fuerza física o la desaparición forzada. Mientras tanto, como menciona Julio Aróstegui (1994) el uso de la violencia por instancias ajenas o contrarias al sistema oficial de poder, se mueve en una dinámica que disturba y amenaza la estabilidad de las expectativas institucionales; desde esta perspectiva, se proyecta un orden social de por si injusto que reafirma la disparidad de visiones, desde donde lo que desafía el curso del poder es considerado siniestro y debe ser eliminado.

 Nos enfrentamos entonces a una violencia que, si hurgamos en la historia política de nuestra nación, forma parte del sistema político del Estado mexicano, una dinámica vertical y bipolar del conflicto, (Dahrendorf, en Aróstegui, 1994) es decir a la llamada “violencia estructural” que sentencia arbitrariamente los criterios de legalidad o ilegalidad de los comportamientos sociales, en donde el reclamo popular, las acciones contestatarias o la simple denuncia civil irrumpen con el curso del poder. Así, los parámetros de justificación o condena del uso de la violencia se maquinan desde el orden político y legal que el mismo Estado se desvive por crear, defender o destruir (Rijle, en Aróstegui, 1994). Esa es la solución a los conflictos sociales, solución que leyendo las palabras de Weber nos afirman que el monopolio de la violencia pública pertenece al Estado y al poder legítimo que lo administra.

La institucionalidad del uso político de la violencia es pues el resultado de un orden social injusto en sí, como se había mencionado, adaptado a un momento histórico determinado, un orden cultural ideologizado que pretende asegurar su dominio mediante una educación formal e informal a base de valores, normas, conceptos, categorías, leyes y prácticas que autentifican su postura, y entonces los otros, los que no se ajustan, son sometidos maquiavélicamente a la voz encarnada de las estrategias de poder que rezan “el fin justifica los medios”.

De esta manera, las formas de violencia también se van adaptando a las necesidades de los perpetradores; sobre esto, Garver (en Litke, 1992) distingue dos tipos de violencia, una es aquella que atenta contra la integridad física de los sometidos y la otra es la que coarta su capacidad de toma de decisiones. De acuerdo a esto, el alcance de la violencia tiene un horizonte mucho más amplio que el conceptualizado desde el discurso institucional, ya que la violencia no sólo implica el daño contra el cuerpo o la vida de las personas, sino que se aplica de manera abierta o encubierta haciendo uso de formas discretas de dominación, que paradójicamente restringen la capacidad de obtención y mantenimiento de libertades, derechos, bienes y valores mediante un sistema judicial que ostenta la protección de las garantías individuales, al tiempo que escenifica una visión irreal del mundo que mantiene las expectativas de los individuos o simplemente los distrae de la intención de reclamarlos.

El poder efectivo está en el uso de la violencia para dominar y restringir la capacidad de control de las masas, reside en matar, torturar, desaparecer; pero también en reemplazar, desechar, rechazar o ignorar al otro para reducir su marco de toma de decisiones y asegurar su sometimiento. Con esto queda claro que la miseria, la pobreza, el abandono social y la injusticia en todas sus modalidades, se posicionan en la vida cotidiana como formas de violencia que impactan a la sociedad con tanto o mayor gravedad y constancia como la violencia física que gobierna las aceras. Con todo esto, México, como señala Dresser (2011, p.264):

*…* es un país de crímenes sin castigos; de delincuentes rara vez aprehendidos y muchas veces liberados…De poco sirve un despliegue masivo de tropas y fuerzas de seguridad federal, que en el menor de los casos, son un disuasivo temporal para la criminalidad*.*

Ahora, hablemos desde la voz de nuestra historia; qué decir entonces de un país que a lo largo de estos seis años y los seis anteriores, y muchos otros anteriores a estos, han confirmado que la violencia se corona como el artilugio predilecto para someter a manos del miedo colectivo, con posibilidades engañosas, inalcanzables o nulas que extorsionan y asfixian a las personas negociando ventajosamente con sus necesidades en pos del mantenimiento de su nicho de poder, y sólo eso. En torno a ello, cambian, modifican, inventan o eliminan reformas y leyes que, a costa de la calidad y costo de vida de la población, son implementadas para acercar a nuestro país a la tan prometida modernidad. Tenemos por ejemplo, los *gasolinazos*, los recortes salariales, los impuestos desmedidos, las cuentas misteriosas, los presos sin delito, los delitos impunes, los delincuentes mismos disfrazados de héroes, los actos de violencia genocida justificados como actos de defensa nacional.

En ese sentido, nos preguntaríamos ¿si acaso no es violencia la indiferencia que muestra el Estado ante estos padecimientos sociales?, ¿si no es violencia la forma en la que los reclamos de la sociedad son acallados y olvidados en medio de baratos discursos y espectáculos televisivos?, ¿en verdad no es violencia la inagotable cuenta de desaparecidos, torturados, encarcelados y la perplejidad que nos abraza ante el azaroso riesgo de anexarnos a esas cifras?, ¿no es violencia cada alza de precios, impuestos y demás números que adelgazan anémicamente el bolsillo de los mexicanos?, ¿no es violencia la corrupción y la impunidad con la que son llevados a cabo los proceso judiciales en donde sin mordida no existe la justicia o donde las víctimas, sin saber cómo ni por qué, terminan siendo los victimarios?, y ahí sí deben pagar por su delito; ¿en dónde las denuncias, anónimas o directas, terminan siendo un mero acto de fe? Porque cómo siempre, para que un trámite avance hay que esperar, y esperar y esperar o pagar, claro.

La violencia va más allá de las cifras que mencionan en la televisión y la prensa, pues la violencia social, madre de la violencia sexual, psicológica, económica, política, militar, etc. se encuentra en las entrañas de la dinámica imperante en donde quienes eran nuestro resguardo ante la injusticia, nos han mostrado descaradamente que son parte de *La organización criminal* que gobierna nuestro país, ante ello, la mayoría de nosotros tenemos pocas posibilidades de escape y un sinfín de esperanzas diluidas en el desengaño y la desilusión que muestra la realidad, día a día. Ya nadie cree nada, y sin embargo seguimos esperando.

Ante esto, el agudo y perspicaz ingenio de los dueños de nuestro país, encuentra sencillas formas de distraer el descontento y la voluntad de las personas, tenemos como ejemplo cada nuevo escándalo que capta la atención popular, protagonizado por vedettes de la esfera política, chismes insulsos de la vida privada del espectáculo, o eventos que atraen el morbo de ingenuos, esconden tras sus escenarios actos atroces que se ejecutan sin que nadie observe y nadie haga nada a su disposición involuntaria.

 Queda claro que si ignorarnos, culparnos o negarnos el apoyo es una forma violenta de acabar con nosotros como rivales en la lucha por el poder. Entonces ¿quién nos protege? y ¿a qué clase de seguridad se refieren los que dicen protegernos? O que nos aclaren ¿a qué se referían con la definición de justicia que dicen que nos ampara como individuos en esta sociedad? Porque el deber y el deber ser que nos han enseñado no encuadra con las promesas de un país “justo, próspero y democrático”. ¿En dónde está entonces la supuesta soberanía de nuestra nación, el llamado Estado de Derecho, la ley justa y al servicio de todos por igual? En efecto, las hemos aprendido escuchándolas en los mítines, en las convenciones, en los informes de gobierno, en las promesas de campaña, en los textos educativos, en los programas que venden intelectualidad barata y en las lenguas hipócritas que hablan de progreso.

Anteriormente, las instituciones nacionales de justicia, las instancias oficiales de protección de derechos humanos, las leyes, los policías, los militares, y demás sujetos en quienes se depositaba la confianza en el ejercicio de la justicia y la protección civil se ha desdibujado con rapidez en medio del descaro con el que ostentan un cargo oficial, al tiempo que cobran su cuota por resguardar la criminalidad a costa de nuestra seguridad y nuestras vidas; dejándonos al desamparo total cuando se diluyen las posibilidades de encontrar un resguardo físico y emocional, disparándose la angustia, el miedo y la incertidumbre de transfigurarnos en entes sin rostro ni voz.

El problema va más allá de las leyes y su movilidad, el problema radica en la sagacidad para hacer parecer legal lo ilegal, en el truco para acomodar sigilosamente las letras de la ley de manera que siempre hay excepciones o posibilidades absurdas, padeciendo una ceguera voluntaria que exige pruebas para validar lo evidente; confundiendo las versiones de manera que en un momento a otro las víctimas se convierten en delincuentes. Los demás se lavan las manos y todo sigue como si nada, “eres uno más, espere su turno, vuelva más tarde, no hay presupuesto, pase a otra instancia, consiga un abogado, esto es tardado, tal vez se fue con su novio al rato regresa, usted se lo buscó…”. Así es y así funciona.

Y bueno, ¿Cuál es la esperanza y el motor de lucha que hemos de seguir entonces?, en realidad es difícil hacer una propuesta que no suene a discurso de revueltas fugaces o movimientos diluidos ya vistos pasar; de aquellos que en algún momento nos hicieron indignarnos y salir a la calle a caminar y a gritar y después se quedaron atascados en las intenciones diplomáticas. Es difícil proponer desde una voz que no dé lecciones de vida tipo panfletos revolucionario-Guadalupanos, pero si sabemos que la realidad de nuestros tiempos demanda un cambio en las formas de vida y en las estrategias de lucha surgidas desde debajo de la estructura de poder; no es suficiente con padecer, lamentarse, entenderlo o debatirlo intelectualmente hasta llegar al mismo punto en el que se inició; hace falta mucho más.

Si una sola persona es la que grita en medio del desierto, su voz se perderá entre las dunas; pero si las voces se suman en coro y caminan juntas, algo se ha de escuchar, algo se ha de mover. Tengamos presente que la esperanza en una transformación debe partir de la clarificación de nuestro papel como actores sociales, como ciudadanos; ese podría ser el primer paso.

 En esta estructura de poder definitivamente la solución a su ceguera, sordera y pereza voluntaria no se encuentra en *pedir justicia***,** cuya propia semántica implica una postura pasiva, implorante, espectadora, ingenua; sino en hacer justicia desde la acción justa, es decir, *exigir justicia* implica informarse, cuestionar, colaborar, insistir, actuar. Si somos tan poco fiables en nuestra naturaleza de hombres políticos, como señala Hobbes, debemos pues trabajar en una autoridad soberana, autocrática que nos dicte las normas de coordinación social, partiendo de la conciencia y la movilidad individual para convertirla en acciones colectivas, porque no es uno ni cien los que vivimos bajo la sombra del miedo, somos una generación maniatada por un miedo que a veces es más grande cuando nos sabemos desamparados por la justicia, término que cada vez nos es más ajeno.

Pero cuando ese miedo deja de ser mordaz y se convierte en coraje, y ese coraje se comparte como un sentimiento multiplicado por miles que fluye en las almas heridas de quienes deciden *dejar de pedir para hacer justicia*, para recordar que nuestra naturaleza de mamíferos nos hizo sobrevivir gracias a la manada; pensar y sentir en uno mismo, como señala Gustavo Esteva: (en la jornada 17 de septiembre de 2012) “*si dañan a uno, nos dañan a todos*”. Sólo entonces veremos en la unión la punta de lanza para matar al predador que habita en nuestra morada y quizá entonces veremos renacer la esperanza que muere un poco cada día.

Podemos comenzar por retomar y aprovechar el poder que nos concede la capacidad de actuar de consuno, es decir, de empatar los deseos de justicia y sumarlos a una razón colectiva que mueva las voluntades. Que las acciones reunidas corporicen la utopía transformándola en un sólo deseo y una sola práctica de verdadera equidad; en una realidad que si pensamos bien no es ni tan utópica ni tan nueva, se trata sólo de desaprender voluntariamente los vicios del egocentrismo para mover la estructura desde la raíz, comenzando por reflexionar la actitud que asumimos en las interrelaciones sociales en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en la pareja, en el camino diario, en la coincidencia, en los desacuerdos, en las diferencias, en la irracionalidad de nuestros deseos, ahí justo ahí se combate el poder que alimenta la violencia y la injusticia. El poder que otros han aprovechado para hacernos menos a los que somos más, porque no podemos exigir un cambio de ocasión cuando la responsabilidad está en la sociedad misma y en sus prácticas cotidianas, ahí se encuentra el poder que se oculta en la mítica y fantasmal democracia.

No nos confundamos, los que gobiernan, los que nos representan para crear leyes y los que deberían resguardar el estado de justicia son también parte de la estructura social, con sus funciones y jerarquías necesarias, pero sólo hace falta recordar, todos, ellos y nosotros pueblo, que vamos en el mismo barco y si la base se debilita, se fragmenta o se quebranta, por ley natural todo terminará bajo el agua. Los anhelos de superación y éxito que compramos en los estereotipos paridos en el seno del neoliberalismo y la posmodernidad, no son más que espejismos que anulan las carencias que requieren ser miradas de frente y escuchadas sin falsas interpretaciones. La prosperidad de una nación no puede lograrse en medio de una batalla interna que está asfixiando velozmente la posibilidad de subsistencia económica, social, incluso emocionalmente. Si continúa el cerebro de la impunidad operando desde las fauces de los sistemas de justicia, ninguna ley, ningún partido político, ningún programa de supuesto apoyo social, o ninguna estrategia de seguridad, podrán tener resultados favorables para la población civil.

Si bien, como se dice comúnmente, las transformaciones no se hacen de la noche a la mañana, la esperanza de mirar un horizonte distinto no es del todo una utopía; algunas comunidades nos han mostrado que sí existe otra forma de vivir, de resistir, de mantenerse íntegros aún a costa de la voracidad del poder; pero ellos también nos han enseñado a trabajar cooperando, no compitiendo; teniendo como ley el **“***mandar obedeciendo*”, gritando para que nos escuchen si es necesario, pero siempre caminando con la esperanza como única vereda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aróstegui, J. (1994).Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia. *Violencia y política en España*, 13, 17-56. Recuperado de: <http://www.ahistcon.org/docs/ayer/ayer13_02.pdf>

Dresser, D. (2011). *El país de uno. Reflexiones para entender y cambiar a México*. México: Santillana Ediciones Generales.

Esteva, G. (2012, Septiembre 17). Celebración del funeral*.* *La jornada*, recuperado de: <http://www.jornada.unam.mx/2012/09/17/opinion/024a1pol>

Litke, R. (1992). Violencia y poder. *Revista internacional de ciencias sociales, XLIV* (1), 161-172.

1. Licenciada en Psicología por la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Profesora de licenciatura en Ciencias de la Educación en el Centro Universitario Haller. Psicoterapeuta corporal. Correo electrónico: irma.fs\_psic@hotmail.com [↑](#footnote-ref-1)